

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS (CED)

María Guadalupe Sanabria¹, María Jimena Rui² y Erika Silvina Bauger³

“La desaparición forzada es el crimen de crímenes, porque se viola todos los derechos de una persona, se la priva de todos sus derechos. Es imprescriptible y permanente, todos los días la persona sigue desaparecida”

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Introducción.

La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, y con ella se estableció el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Al igual que para muchos otros temas de derechos humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias⁴ coexisten lado a lado y buscan colaborar y coordinar sus actividades con el fin de fortalecer los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar este delito.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos: 1) La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; 2) La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia; 3) La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

¹ Abogada graduada en la Universidad de Palermo. Miembro del Grupo de Litigio Estratégico (GLE). Maestranda en Derechos Humanos de la UNLP.

² Abogada graduada en la Universidad Nacional de Tucumán. Estudio avanzado en DDHH, American University Washington College of Law. Maestranda en Derechos Humanos de la UNLP.

³ Abogada, egresada con Diploma de Honor y Medalla de la UNLP. Premio "Joaquín V. González". Auxiliar Docente con funciones de Adjunta de la Cátedra I de Derecho Internacional Privado de la FCJyS. de la UNLP. Especialización en Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca. Miembro del AADI, ASADIP e Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata. Becaria de investigación en Iniciación, Perfeccionamiento y Formación Superior de SECyT de la UNLP. Maestranda en Relaciones Internacionales y en Derechos Humanos de la UNLP. Estudiante de la Especialización en Docencia Universitaria de la UNLP. Integrante de la Red de Profesoras de la FCJyS y del Observatorio de Enseñanza del Derecho de la UNLP. ebauger@gmail.com, ebauger@jursoc.unlp.edu.ar. <https://orcid.org/0000-0002-6207-4203>.

⁴ El mandato fundamental del Grupo de Trabajo es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. El Grupo recibe y examina los informes sobre desapariciones presentados por los parientes de las personas afectadas o por organizaciones de derechos humanos que actúan en su nombre. Tras verificar si esos informes cumplen determinados criterios, el Grupo de Trabajo transmite los distintos casos a los gobiernos de que se trate, pidiéndoles que realicen indagaciones y que le informen sobre sus resultados. Con fecha 15/06/2019 se hizo pública la comunicación sobre Argentina del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, expresando preocupación respecto de un posible emprendimiento en Campo de Mayo que puede colocar en riesgo derechos de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Se puede acceder al documento en el sitio web spcommreports.ohchr.org.

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas es un órgano compuesto por diez expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por sus Estados Partes. Conforme el art. 29 de la Convención, todos los Estados Partes deben presentar informes, dentro de los dos años posteriores a la ratificación de la Convención sobre el cumplimiento de la misma. El Comité examinará cada informe y expresará sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.

En el presente trabajo analizaremos las últimas 21 observaciones finales (diciembre de 2013- abril de 2019) realizadas por el Comité respecto de los siguientes Estados parte de la Convención: Chile, Perú, Portugal, Japón, Austria, Honduras, Albania, Lituania, Gabón, Ecuador, Cuba, Senegal, Colombia, Bosnia y Herzegovina, Kazajstán, Túnez, Burkina Faso, Montenegro, Iraq, Paraguay y Argentina.

Como metodología de análisis en primer lugar, identificamos y analizamos las observaciones comunes que realizó el Comité CED respecto de los países mencionados. Luego, delimitamos las observaciones particulares que efectuó a cada Estado que no se reiteran en los demás, pues tienen que ver con el contexto y situaciones concretas de cada país. Asimismo, a pie de página hemos incorporado aspectos normativos específicos relativos a nuestro ordenamiento jurídico.

Preocupaciones y recomendaciones comunes:

I. Reconocimiento de la competencia del Comité.

El Comité observa que los Estados de Colombia, Senegal, Cuba, Gabón, Burkina Faso, Túnez, Kazajstán, Iraq, Paraguay, aún no han reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención; que el Estado de Perú no ha reconocido su competencia para recibir y examinar comunicaciones interestatales y que Japón no ha reconocido su competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales. El Comité alienta a los mencionados Estados a reconocer la competencia en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma.

II. Registros de casos de desapariciones forzadas.

En las observaciones finales a los Estados de Perú, Honduras, Argentina e Iraq, el Comité ve con preocupación que no existan datos estadísticos sobre desapariciones forzadas. Es por ello que recomendó que dichos Estados establezcan un registro único nacional sobre todos los casos de desaparición forzada ocurridos en sus territorios, que incluya: información sobre el sexo, la edad, la

nacionalidad y el grupo étnico o la afiliación religiosa de la persona desaparecida, así como el lugar y la fecha de la desaparición; incluya información que pueda utilizarse para determinar si el caso en cuestión es una desaparición forzada o si se trata de una desaparición en la que no hayan participado en modo alguno agentes del Estado; facilite la generación de datos estadísticos sobre los casos de desapariciones forzadas, incluidos los casos que se hayan esclarecido; se complete cuanto antes y de manera sistemática y exhaustiva, y se actualice periódicamente.

III. Registros de personas privadas de la libertad.

El Comité observa con inquietud que los Estados de Argentina, Paraguay, Montenegro, Burkina Faso, Túnez, Kazajistán, Senegal, e Iraq no cuenten con registros de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Es por ello que les recomienda a los Estados mencionados que establezcan en sus territorios un sistema de registros informatizado y uniforme que cubra todo el territorio nacional y que dicha información incluya, como mínimo, los datos exigidos por el artículo 17, párrafo 3 de la Convención⁵. A su vez dichos registros deben ser completados y actualizados periódicamente. Les encomienda, asimismo, que incluyan explícitamente en su legislación penal, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Convención, sanciones para quien, de manera intencional, no registre una privación de libertad o una información prevista o rehúse proporcionar esa información.

IV. Regulación de la desaparición forzada.

En cuanto a la regulación del delito de desaparición forzada, tipificado en el art. 2 de la Convención⁶, en los países de Bosnia y Herzegovina, Senegal, Colombia, Cuba, Gabón, Lituania, Perú, Chile, Japón, Portugal, Albania y Honduras, Burkina Faso, Montenegro, Túnez, Kazajistán, Iraq, Paraguay y Argentina, al Comité le han preocupado varios puntos, a saber:

⁵ El art. 17 párr. 3 establece que: “Cada Estado Parte asegurará el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente de acuerdo con la legislación nacional o cualquier instrumento jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte. Esa información contendrá al menos: a) La identidad de la persona privada de libertad; b) El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de libertad; c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta; d) La autoridad que controla la privación de libertad; e) El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar; f) Los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad; g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida; h) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado.”

⁶ Art. 2: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

a- Tipificación como delito autónomo.

Los países de Cuba, Gabón, Perú, Chile, Japón, Portugal, Honduras, Montenegro, Burkina Faso, Túnez, Kazajstán, Iraq, no poseen en su marco jurídico interno ninguna norma que regule al delito de desaparición forzada como delito autónomo. El Comité hace hincapié en que no basta con remitirse a diferentes delitos ni a las normas conexas para satisfacer la obligación impuesta por la Convención, puesto que el delito de desaparición forzada no se compone de una serie de infracciones distintas, sino que constituye un delito autónomo, cometido por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de conformidad con la definición del artículo 2 de la Convención. En tal sentido recomienda a ambos Estados partes a tipificar en sus correspondientes cuerpos legales el delito de desaparición forzada como delito autónomo con todo lo que a él respecta.

Con respecto a Paraguay, el Comité nota con satisfacción que el artículo 236, párrafo 1, del Código Penal tipifica la desaparición forzada de conformidad con la definición prevista en el artículo 2 de la Convención. Sin embargo, le preocupa que la frase “sustrayéndola de la protección de la ley” incluida en la citada norma pueda ser interpretada como un elemento intencional (*animus*) necesario para la incriminación de la conducta delictiva en lugar de ser considerada como una consecuencia de la misma. El Comité recomienda que el Estado adopte las medidas necesarias, incluyendo formación adecuada para jueces y fiscales, a fin de asegurar que dicha frase sea considerada como una consecuencia de la comisión del delito de desaparición forzada y no como un elemento intencional (*animus*) necesario para la incriminación de la conducta delictiva.

El Comité observa que Senegal ha iniciado un proceso legislativo para revisar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y que en el proyecto de artículo 153 del nuevo Código Penal la desaparición forzada se define en los términos artículo 2 de la Convención y se tipifica separadamente como delito punible (arts. 2, 4, 6 y 7). Al respecto exhorta a que el Estado acelere el proceso de reforma.

El Comité acoge con satisfacción que Argentina haya tipificado la desaparición forzada de personas en su Código Penal.⁷ Sin embargo, observa con preocupación que la aplicación del delito de

⁷ El art. 142 ter del Código Penal argentino (texto conforme ley 26.679 del 2011) tipifica el delito de desaparición forzada. Así: “*Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de DIECIOCHO (18) años, una persona mayor de SETENTA (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La escala*

desaparición forzada presenta algunas dificultades en la práctica. El Comité toma nota de la información brindada por el Estado acerca de la iniciativa de reforma del Código Penal (art. 2) y alienta a asegurar que la misma se ajuste plenamente a las obligaciones contenidas en la Convención, incorporando las modificaciones que sean necesarias para asegurarse que en su aplicación se cumple efectivamente el mandato contenido en su artículo 2.⁸

b- Tipificación como delito de Lesa Humanidad.

Al Comité le preocupan los Estados parte de Cuba, Gabón, Perú, Japón, Portugal, Albania, Honduras, Túnez, Kazajstán en lo pertinente a que ninguno de ellos ha tipificado al delito de desaparición forzada como delito de Lesa Humanidad, incumpliendo así con el art. 5 de la Convención.⁹ Por ello recomienda que adecuen su legislación de manera inmediata.¹⁰

Con respecto a Senegal, toma nota que en virtud del artículo 431-2 del Código Penal, “la reducción a la esclavitud o la práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, de secuestros de personas seguidos de su desaparición” constituyen un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, observa con preocupación que en esa disposición, en la que no se define la desaparición forzada, no se hace referencia a las consecuencias que entraña la práctica sistemática o generalizada de la desaparición forzada, como se exige en el artículo 5 de la Convención. En particular, señala que la formulación del artículo 431-2 sugiere erróneamente que la desaparición forzada sólo constituye un crimen de lesa humanidad si va precedida del secuestro de personas (art. 5). Es por ello, que solicita la modificación de la legislación para garantizar su conformidad y explicitación de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en los términos de la Convención.

c- Atenuantes y agravantes.

Los países de Bosnia y Herzegovina, Senegal, Gabón, Lituania, Japón, Honduras, Burkina Faso, no han tipificado, tal cual lo impone la Convención, las circunstancias atenuantes y agravantes del delito de desaparición forzada. Al respecto, insta a dichos Estados partes, a hacer eco en sus

penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.”

⁸ El artículo 2 del Código Penal establece el principio de la ley penal más benigna: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

⁹ “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable” (art. 5).

¹⁰ Argentina por Ley 25.390 del 8/1/2001 aprobó el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que en su art. 7 contempla como “crimen de lesa humanidad” *cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:...* i) Desaparición forzada de personas;...”

legislaciones internas de las causales atenuantes y agravantes del delito de desaparición forzada reguladas en la Convención, que incluyan todos los elementos mencionados en el art. 7, párr. 2 de la misma¹¹. Recomienda que se asegure que las circunstancias atenuantes no impidan en ningún caso la imposición de una sanción adecuada.

V. Prohibición absoluta de desaparición forzada (inderogabilidad).

El Comité expresa su inquietud para con los Estados de Bosnia y Herzegovina, Senegal, Gabón, Perú, Austria, Japón, Túnez y Montenegro, ya que dentro de su marco legal no existe ninguna norma que disponga que la prohibición absoluta de la desaparición forzada rige incluso en circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de emergencia.

Por ello, el Comité recomienda incorporar en el derecho interno una prohibición de carácter absoluto del delito de desaparición forzada, es decir su inderogabilidad en cualquier circunstancia, de conformidad con el art. 1 párr. 2 de la Convención¹².

VI. Suspensión de funciones al oficial público investigado.

Al Comité le preocupa la situación de Cuba, Ecuador, Austria, Paraguay y Montenegro. Esto así, dado que sus legislaciones internas no prevén una norma que suspenda de sus funciones al oficial público investigado por un delito de desaparición forzada. El Comité considera esta suspensión como una herramienta a fin de impedir la obstaculización del desarrollo de las investigaciones. Por ello, recomienda que adopten las medidas necesarias para velar por que los agentes estatales bajo sospecha de haber estado implicados en la comisión del delito sean suspendidos de sus funciones, desde el comienzo y mientras dure la investigación, sin perjuicio de que se respete el principio de presunción de inocencia.

VII. Penas apropiadas.

En las observaciones finales a los países de Cuba, Gabón, Lituania, Perú, Chile, Japón, Austria, Albania, Kazajstán, Iraq, Túnez, el Comité expresa su preocupación en relación a las penas del delito de desaparición forzada. En este sentido, recomienda que se castigue la práctica con penas

¹¹ El art. 7 párr. 2 establece que: “Los Estados Partes podrán establecer: a) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido partícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada; b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.”

¹² El art. 1 de la Convención regla: “1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.”

adecuadas que tengan en cuenta su extrema gravedad y al mismo tiempo se evite la imposición de la pena de muerte; se elimine la posibilidad de que se concedan indultos; se prevean las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el art. 7, párr. 2 de la Convención, velando por que las circunstancias atenuantes en ningún caso supongan la no imposición de una pena adecuada.

VIII. Responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.

Al Comité le inquieta que los Estados de Perú, Japón, Portugal, Senegal, Albania, Honduras, Kazajstán, Iraq, Montenegro, Burkina Faso, Túnez, no poseen disposiciones que reglamenten la responsabilidad penal del superior jerárquico tal y como lo manda el art. 6 de la Convención. Por ello, recomienda que los Estados mencionados adopten las medidas legislativas necesarias con miras a incorporar específicamente en la legislación penal la responsabilidad penal de los superiores en los términos establecidos en el artículo 6, párr. 1, apartado b), de la Convención. Asimismo, aclara los puntos que deben tenerse en cuenta al momento de legislar, de modo que la legislación penal prevea la responsabilidad del superior que ordene o solicite una desaparición forzada, y cuando este: a) haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; b) haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; c) no hay adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. También, exhorta que la legislación nacional disponga específicamente la prohibición de invocar las órdenes o las instrucciones de un superior para justificar un delito de desaparición forzada y reforzar la protección y las garantías jurídicas para los subordinados que deseen desobedecer una orden de un superior de cometer una desaparición forzada.

IX. Jurisdicción aplicable.

Al Comité le preocupa que en los Estados de Cuba, Gabón, Chile, Albania, Honduras, Burkina Faso, Túnez, Iraq, no se exprese claramente a qué tribunal le corresponde la competencia en la investigación y juzgamiento de los delitos de desaparición forzada.

A este respecto, el Comité recomienda que se adopten las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, para que las desapariciones forzadas queden expresamente fuera de la competencia de los tribunales militares en todos los casos, ya que, por principio las jurisdicciones militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas. Es por ello, que la jurisdicción penal en la materia sólo

debe recaer en los tribunales ordinarios, en los términos que se contemplan en el artículo 9, párrafos 1 y 2, de la Convención¹³.

X. Prescripción de la acción penal. Carácter continuo del delito.

El Comité expresa su inquietud con respecto a la situación en los Estados de Cuba, Senegal, Gabón, Chile, Japón, Austria, Albania, Montenegro, Túnez, Kazajistán, ya que su legislación no se ajusta a lo previsto en el art. 8 de la Convención.¹⁴

En el caso de Cuba, como en su legislación interna el delito de desaparición forzada no está dentro de los delitos de Lesa Humanidad, no son imprescriptibles. Sumado a ello, al igual que en otros países como Montenegro, la prescripción de la acción penal para los delitos en general comienza a correr, desde la comisión del delito y no desde que cesa el mismo (es decir desde la aparición de la persona con vida o no). Esto último también ocurre en Chile y Albania. En el caso de Gabón, el delito de desaparición forzada no está sujeto a un plazo de prescripción; a diferencia de los Estados de Japón, Burkina Faso en los cuales si bien existe un plazo de prescripción, el Comité considera que el mismo es breve.

El Comité señala que la desaparición forzada constituye una serie única y consolidada de actos que continúa durante todo el tiempo que transcurre hasta que se determina la suerte o el paradero de la víctima, y que no es una serie de actos aislados. La Convención tiene en cuenta el carácter continuo del delito de desaparición forzada, en particular para garantizar que el plazo de prescripción no comience a contar hasta que cese la desaparición forzada (art. 8). Y en caso de que se aplique un plazo de prescripción respecto de la desaparición forzada, los Estados deben velar que éste sea prolongado y proporcional a la extrema gravedad del delito, y que se cuente a partir del momento en que cesa el delito.

XI. Investigación de casos de desaparición forzada (Instituciones Nacionales de DDHH).

¹³ El art. 9 contempla: “1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los siguientes casos: a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado; c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. 2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido. 3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales.”

¹⁴ Art. 8: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5: 1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal: a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito; b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito. 2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción.”

Con respecto a este punto, al Comité le alarma que Senegal, Cuba, Gabón, Portugal, Austria y Burkina Faso, no posean, o de poseerlos, no funcionen de manera correcta y acorde a la Convención, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que se dediquen a la investigación exhaustiva de casos de desaparición forzada ocurridos en sus respectivos territorios. Por ello, encomienda a los mismos poner los recursos tanto humanos como financieros a fin de llevar a cabo esta tarea.

En lo que respecta a Bosnia y Herzegovina, Colombia, Chile, Japón, Honduras y Perú le preocupa el número de casos de personas desaparecidas sin ser adecuadamente investigados y resueltos.

En particular preocupa al Comité lo siguiente:

- Bosnia y Herzegovina: sigue sin conocerse el paradero de alrededor de 30.000 personas que fueron dadas por desaparecidas como consecuencia de la guerra que pueden haber sido víctimas de desapariciones forzadas. El Comité se declara preocupado por la lentitud de las exhumaciones y las identificaciones y por el insuficiente presupuesto asignado a la Fiscalía, así como por la escasez de expertos forenses. Recomienda al Estado parte que siga esforzándose en establecer la verdad y determinar la suerte y el paradero de todas las personas dadas por desaparecidas y, en caso de que hayan fallecido, identificar sus restos mortales.
- Colombia: si bien se ha visto reducido el número de personas reportadas como desaparecidas, le preocupa la posibilidad de que se sigan cometiendo desapariciones forzadas con la intervención, directa o indirecta, de agentes estatales y la falta de avances significativos en materia de investigación de casos de desaparición forzada y condenas a los responsables. Por ello, encarga que se garantice que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal; que las investigaciones se aceleren; que se garantice que los allegados de las personas desaparecidas puedan presentar denuncias; que se activen las investigaciones por desaparición forzada que se encuentran en curso, incluyendo aquellas que se desarrollan en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz.
- Chile: existen 355 casos de víctimas calificadas respecto de las cuales no hay un proceso judicial y no se ha aprobado el proyecto de ley que tiene por finalidad permitir a los tribunales de justicia acceder a la información recopilada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. El Comité recomienda al Estado: que intensifique sus esfuerzos para incoar las investigaciones, de manera pronta, exhaustiva y eficaz, o acelerar las que se

encuentran en trámite y asegurar el enjuiciamiento de culpables, que deben ser sancionados con penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad de sus actos; que tome medidas para asegurar que las víctimas puedan ejercer su derecho a conocer la verdad sobre la evolución y resultados de las investigaciones; que adopte las medidas necesarias para garantizar que las autoridades que investigan las desapariciones forzadas puedan tener acceso a toda la documentación y demás informaciones pertinentes para llevar a cabo eficazmente sus investigaciones y que cuenten con recursos económicos, técnicos y de personal calificado.

- Japón: existen restricciones para denunciar las desapariciones forzadas, ya que la legislación nacional establece que sólo puede hacerlo quien tenga relación directa con la persona desaparecida y no cualquier persona. Además, entorpece la investigación la competencia de las autoridades militares y la falta de acceso a información específica sobre cómo se deben llevar a cabo las investigaciones. Es por ello, que el Comité solicitó a Japón que se garantice el derecho de toda persona a denunciar una presunta desaparición forzada a las autoridades competentes independientemente de su relación con la persona desaparecida y vele porque el denunciante tenga a su disposición recursos en el caso de que las autoridades competentes se nieguen a investigar su caso; se garantice que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada, emprenda sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, de oficio; que las autoridades encargadas de investigar tengan acceso a toda la información y documentación pertinentes y acceso a todos los lugares de privación de libertad en el que haya motivos razonables para creer que puede encontrarse una víctima y que proporcione recursos financieros, humanos y capacitación suficientes a las autoridades encargadas de las investigaciones.
- Austria: si bien se presentan denuncias al respecto, existe un número muy reducido de acusaciones formuladas. El Comité exhorta al Estado que se adopten las medidas necesarias para que los presuntos autores de desapariciones forzadas sean debidamente juzgados y, en caso de ser declarados culpables, sean sancionados de manera proporcionada a la gravedad de sus actos. También, recomienda al Estado brindar asistencia recíproca a otros países para investigar los casos de desapariciones forzadas.
- Honduras: preocupa al Comité que los únicos facultados para incoar una acción penal contra miembros de la policía militar son jueces y fiscales que aprobaron las “pruebas de confianza” practicadas por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. El Comité especificó las siguientes recomendaciones: que los delitos de desaparición forzada de los que sean acusados miembros de las fuerzas de seguridad sean investigados y enjuiciados por

fiscales y jueces competentes, independientes e imparciales, que no tengan vínculos institucionales con la entidad a la que pertenece la persona investigada; que se aceleren las investigaciones que se encuentran en curso, y se asegure que todos los casos de desaparición forzada, incluidos los perpetrados durante 1980-1990, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados; fomente y facilite la participación de toda persona con un interés legítimo (allegados, familiares y representantes legales de las personas desaparecidas) en las investigaciones y en todas las etapas procesales; se garantice el acceso a las autoridades e instituciones competentes a cualquier lugar de privación de libertad donde haya motivos para creer que pueda encontrarse una persona sometida a desaparición forzada.

- Perú: preocupa que el Comité no haya recibido información detallada sobre las denuncias recibidas y el escaso número de enjuiciamientos y condenas por casos de desapariciones forzadas, así como el hecho de que la mayoría de las sentencias hayan sido absolutorias. El Comité solicita al Estado: que acelere las investigaciones que se encuentran en curso y asegure que todos los casos, sin excepción, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean sancionados con penas apropiadas; asegure que las autoridades competentes para investigar desapariciones forzadas dispongan del personal y de los recursos financieros y técnicos adecuados para llevar a cabo su labor con eficacia; garantice el acceso a la información y a los archivos relevantes, en particular, a la información perteneciente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que ningún agente del Estado, civil o militar, sospechoso de haber cometido un delito de desaparición forzada, esté en condiciones de influir en el curso de las investigaciones.
- Argentina: El Comité expresa su preocupación por la existencia de casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social. Además, recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada durante la dictadura hayan sido relevados de su función.

Por lo expuesto, alienta al Estado Argentino a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada y que promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados. Asimismo, que se prevean las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada estén a cargo de órganos especialmente capacitados, y se

realicen de manera exhaustiva e imparcial, diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, y que continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.

- Paraguay: le preocupa al Comité que el mandato del Defensor del Pueblo haya expirado en 2008 y que aún no se haya designado a su sucesor. Al respecto, el Comité toma nota del proceso que se sigue en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional para conformar una terna para el nombramiento. Asimismo, le preocupa la información que da cuenta de que la Defensoría no contaría con los recursos adecuados para el eficaz desempeño de sus funciones. Recomendando que el Estado parte adopte las medidas necesarias para designar lo antes posible a un nuevo Defensor del Pueblo con las debidas condiciones de idoneidad y que cuente con los recursos financieros, materiales y de personal necesarios para desempeñar su mandato de manera eficaz e independiente, de conformidad con los Principios de París.
- Montenegro: el Comité observa que en Montenegro se han instruido y enjuiciado seis casos de crímenes de guerra relacionados con actos cometidos en el pasado en el contexto de los conflictos armados en la ex Yugoslavia. Expresa su preocupación por las informaciones de varias fuentes que señalan las deficiencias del procedimiento que dieron lugar a la absolución de la mayor parte de los acusados en causas juzgadas más recientemente. El Comité toma nota de las informaciones sobre la falta de investigaciones acerca de la responsabilidad de los mandos, la coautoría y la complicidad, debido a lo cual pocos de los responsables de alto nivel tuvieron que rendir cuentas, y sobre la lenidad de las penas impuestas a los procesados, que en algunos casos fueron inferiores al mínimo legal porque se aplicaron circunstancias atenuantes. Se exhorta al Estado que adopte las medidas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito específico en consonancia con la definición del art. 2 de la Convención y recomienda también que el delito se castigue con penas adecuadas que tengan en cuenta su extrema gravedad y que se establezca un sistema de responsabilidad superior conforme al artículo 6, párrafo 1 b). El Comité recomienda al Estado que asegure la aplicación efectiva de las medidas de protección existentes y que éstas se extiendan a todas las personas a que se refiere el art. 12, párrafo 1, de la Convención. El Comité encarga al Estado que todas las denuncias potenciales de amenazas o intimidaciones contra testigos en juicios por crímenes de guerra se investiguen a fondo, sin demora y de manera imparcial aunque no se haya presentado ninguna denuncia oficial, y que los presuntos responsables sean procesados y, de ser declarados culpables, sean castigados con penas adecuadas.

XII. Protección de las personas que denuncian y/o participan en la investigación.

Se observa una preocupación común sobre este aspecto con relación a los Estados de Colombia, Senegal, Gabón, Perú, Honduras y Argentina. Estos países carecen de una legislación que proteja de manera integral a quienes denuncian éste delito o participan de la investigación; y en el caso de Argentina, la misma es insuficiente. Particularmente, alarma la situación de Perú, Colombia y Honduras, toda vez que existen alegaciones sobre hechos de hostigamiento, intimidación, ataques y amenazas de los que habrían sido objeto algunos familiares de personas desaparecidas, denunciantes, defensores de DDHH que asisten a las víctimas e inclusive funcionarios judiciales. El Comité recomienda que los Estados redoblen sus esfuerzos para garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párr. 1 de la Convención, con el objeto de prevenir todo maltrato o intimidación de los que pudieran ser objeto.

XIII. Medidas para prevenir las desapariciones forzadas.

Como medidas preventivas, en la mayor parte de las observaciones finales el Comité recomienda las siguientes:

a) Mecanismos de expulsión, devolución, entrega y extradición.

El escenario en Bosnia y Herzegovina, Cuba, Lituania, Gabón, Perú, Japón, Portugal, Austria, Albania, Montenegro, Burkina Faso, Túnez, Kazajstán, Iraq, Ecuador, preocupan al Comité, debido a que estos países no contemplan en su legislación la prohibición de expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona cuando ésta corra peligro de sufrir desaparición forzada en el país de destino.

El comité recomienda y alienta a los Estados a modificar e incorporar a su legislación la prohibición de expulsión, devolución, entrega o extradición en caso de que haya razones fundadas para creer que la persona objeto de dicha medida estaría en peligro de ser víctima de una desaparición forzada; a asegurar que existan criterios y procedimientos claros y específicos para evaluar y verificar el riesgo de que una persona sea sometida a desaparición forzada en el país de destino antes de proceder a tomar dichas medidas y asegurar el acceso efectivo a un recurso de apelación, con efecto suspensivo, contra cualquier decisión de expulsión, devolución, entrega o extradición.¹⁵

b) Garantías judiciales de personas privadas de libertad.

¹⁵ En el caso de la Argentina, la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal (13/01/1997) establece en el art. 8 como garantías en los casos en que nuestro país actúe como Estado requerido en el proceso de extradición, que: *“La extradición no procederá cuando:...e) Existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: f) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable.”*

Alarma al Comité que en los Estados parte de Colombia, Cuba, Gabón, Lituania, Perú, Japón, Honduras y Montenegro no se garantice el pleno goce de los derechos y garantías que poseen las personas que se encuentran privadas de su libertad. Particularmente, comparten los ocho Estados el incumplimiento de la garantía de la comunicación con sus familiares de quienes fueren privados de su libertad y el derecho a la defensa, puesto que no acceden de manera inmediata a un abogadx.

El Comité recomienda que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar en la ley y en la práctica que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogadx desde el inicio de la privación de la libertad; que todos los casos de privación de libertad, sin excepción, sean inscritos en registros oficiales y/o expedientes que deben actualizarse sin demora y con precisión y ser verificados periódicamente y, en caso de detectarse irregularidades, los funcionarios responsables sean debidamente sancionados; y que los mecanismos autorizados a visitar los lugares de privación de libertad sean independientes.

c) Educación/ Formación sobre la Convención.

Los Estados de Bosnia y Herzegovina, Senegal, Ecuador, Lituania, Perú, Chile, Japón, Portugal, Austria, Albania, Montenegro, Burkina Faso y Kazajstán y Argentina no imparten de manera adecuada información sobre la Convención.

Por ello, el organismo recomienda que se aseguren de que todo el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad (incluidos los jueces, los fiscales y los demás funcionarios encargados de la administración de justicia) reciban una formación adecuada y asidua sobre las disposiciones de la Convención, de conformidad con su art. 23.

Con respecto a Argentina, si bien toma nota con satisfacción de la formación existente en derechos humanos brindada a los agentes del Estado, el Comité lamenta que no se imparta formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención.

d) Definición de víctima y reparación integral.

Respecto a este punto cabe destacar que la preocupación gira transversalmente en torno a las legislaciones de los Estados de Bosnia y Herzegovina, Senegal, Gabón, Lituania, Perú, Japón, Portugal, Austria, Albania, Honduras, Paraguay, Burkina Faso, Iraq, Colombia, Chile, Paraguay, Montenegro, Túnez y Kazajstán, ya que en sus sistemas jurídicos la definición de “víctima de Desaparición Forzada” no es acorde a la Convención, y no poseen un sistema público de reparación

integral para las personas víctimas de desapariciones forzadas que contemple la rehabilitación de la salud de estas personas.

El Comité recomienda la adopción de medidas necesarias para asegurar que la definición de víctima en la legislación interna incluya a toda persona, sin exclusión alguna, que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, para que pueda ejercer los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación. El sistema de reparación integral debe contemplar condiciones individuales de las víctimas teniendo en cuenta, por ejemplo, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, situación social y discapacidad, conforme a lo dispuesto en el art. 24. párr. 4 y 5 de la Convención y a otras normas internacionales en la materia, otorgando así garantías de no repetición.

Con respecto a Argentina, hay que hacer una salvedad, porque si bien existen diversas leyes que disponen medidas de reparación a víctimas, éstas sólo cubren a las víctimas de los sucesos ocurridos hasta diciembre de 1983. Es por ello, que se alienta al país a continuar sus esfuerzos para que su sistema legal garantice a todas las víctimas de una desaparición forzada el derecho a la reparación integral sin importar el marco temporal.

Es dable destacar que en las observaciones finales a los Estados de Montenegro, Túnez y Kazajstán, el Comité enfatiza la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los DDHH de las mujeres y lxs niñxs. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género; y las que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias. Por su parte, lxs niñxs víctimas de desaparición forzada, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los DDHH, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité hace especial hincapié en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y enfoques adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la implementación de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la Convención.

XIV. Situación legal de la persona desaparecida.

Al Comité le preocupa la situación de Colombia, Senegal, Cuba, Ecuador, Perú, Chile, Japón, Honduras, Lituania, Iraq y Paraguay porque en sus legislaciones no prevén disposiciones específicas que esclarezcan la situación legal y procesal de las personas que presuntamente se encuentren desaparecidas, conforme el art. 24. párr. 6 de la Convención. Recomendamos a los Estados que regulen debidamente la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no ha sido

esclarecida y la de sus allegados, sobre todo en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Asimismo, el Comité alienta a establecer en la legislación la declaración de ausencia por desaparición forzada independientemente de la fecha en que hubiese iniciado la desaparición.

Con respecto a Paraguay, el Comité considera que la figura de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento para determinar la situación legal de las personas desaparecidas no refleja con precisión la complejidad del fenómeno de la desaparición forzada. Exhorta al Estado a adoptar disposiciones legales específicas por las que se establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada.

Sobre este punto, preocupa en especial la situación de Iraq donde una persona pueda ser declarada muerta si, por ejemplo, han transcurrido cuatro años desde que se comunicara su desaparición. Habida cuenta del carácter continuado de la desaparición forzada, el Comité estima que, por principio, no existen motivos para presuponer la muerte de la persona desaparecida mientras no se haya esclarecido su suerte (art. 24).

XV. Búsqueda de personas desaparecidas y entrega de restos mortales.

Preocupa al Comité que en los Estados de Perú, Chile, Honduras, Burkina Faso, Túnez, Kazajstán, Iraq, Paraguay y Montenegro, no exista un sistema de búsqueda inmediata cuando se presuma que la persona desaparecida pueda estar con vida. En Perú existen dificultades de coordinación entre los equipos de búsqueda y en Chile existe un reducido número de víctimas de desapariciones forzadas de la dictadura que han sido localizadas hasta el momento y todavía no se ha localizado a cuatro personas víctimas de desaparición forzada con posterioridad a la dictadura.

El Comité recomienda a dichos Estados que redoblen sus esfuerzos para buscar, localizar y liberar a todas las personas desaparecidas y, en caso de encontrarlas sin vida, para la restitución digna de sus restos mortales. Se debe garantizar que cuando se tenga noticia de una desaparición, se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones por parte de autoridades competentes, con la participación de los allegados de la persona desaparecida, si así lo desean y la efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas.

XVI. Legislación relativa a la apropiación indebida de niñxs.

Con respecto a esta temática, se advierte la existencia de una preocupación central del Comité con respecto a la mayoría de los informes de los Estados analizados. Así, en Bosnia y Herzegovina, Colombia, Senegal, Perú, Chile, Japón, Portugal, Albania, Honduras, Austria, Montenegro, Túnez y

Paraguay no existen disposiciones que tipifiquen expresamente como delito los actos relacionados con la apropiación indebida de niños a que se refiere el artículo 25, párr. 1 de la Convención.¹⁶

El Comité recomienda la adopción de medidas legislativas necesarias para tipificar específicamente como delito la apropiación de niños y los demás actos a que se refiere el artículo 25, párr. 1 de la Convención y sancionar esos actos con penas proporcionales a su extrema gravedad. También que establezcan procedimientos específicos que permitan revisar y, si procede, anular, en cualquier momento, toda adopción o medida de acogimiento o tutela como consecuencia de una desaparición forzada, y que existan procedimientos específicos para restituir a sus familias de origen a los niños, que pueden ejercer su derecho a recuperar su identidad si se determinase que la misma fue sustituida. En estos casos, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y teniendo en cuenta su capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.

Preocupaciones/ Recomendaciones individuales.

En las observaciones finales analizadas se observa que el Comité realizó ciertas recomendaciones a algunos Estados atendiendo a su situación particular.

Cuba.

- Independencia del Poder Judicial.

Al Comité le preocupa que la subordinación de los tribunales a otros órganos del Estado pueda afectar la garantía de independencia de los tribunales que requiere la Convención para conocer casos de desaparición forzada. Asimismo observa que la cuestión de la independencia de la judicatura en el Estado parte fue objeto de una recomendación del Comité contra la Tortura en sus últimas observaciones finales (arts. 11 y 12).

¹⁶ El art. 25 establece: “1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra. 2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables. 3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los que hace referencia el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo. 4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada. 5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.”

Es por ello que recomienda al Estado la adopción de las medidas que sean necesarias para garantizar la plena independencia del Poder Judicial de los otros poderes del Estado.

- **Inspección a lugares de detención.**

El Comité observa que no se ha establecido un mecanismo específico e independiente que realice visitas periódicas a todos los lugares donde pueda haber personas privadas de libertad. Considera que un mecanismo de tales características podría contribuir sustancialmente a prevenir violaciones de los derechos y obligaciones que se contemplan en la Convención (art. 17). Sobre el punto, exhorta al Estado Cubano al establecimiento de un mecanismo específico e independiente que permita la realización de visitas periódicas no anunciadas a cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad e invita al Estado parte a reconsiderar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

- **Autoridad encargada de decretar la prisión provisional.**

Al Comité le inquieta que de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal la facultad de decretar la prisión provisional corresponde al Fiscal, pues es quien tiene la función de promover y ejercitar la acción penal pública en representación del Estado. El Comité recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para asegurar que todas las personas detenidas que no sean liberadas, sean presentadas ante un juez, sin demora, para que resuelva la solicitud sobre la adopción de cualquier medida que suponga la privación de libertad y muy especialmente la prisión provisional.

Ecuador.

- **Desapariciones forzadas ocurridas entre 1984-2008.**

El Comité recomienda al Estado la adopción de medidas necesarias para agilizar los procedimientos judiciales por desaparición forzada del período 1984-2008 que se encuentren en curso; judicializar a la mayor brevedad posible los casos que se encuentren en indagación previa; y asegurar que todos los presuntos perpetradores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Asimismo, intensifique sus esfuerzos con miras a localizar a las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante dicho período y, en caso de fallecimiento, para la identificación de los restos, su respeto y restitución en condiciones dignas; y que asegure que todas las personas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada obtengan reparación integral.

Gabón.

- **Trata de personas.**

El Comité ve con inquietud la información recibida sobre la magnitud de la trata de personas, extranjeras o nacionales, especialmente mujeres y niñas y destaca la particular vulnerabilidad de esas personas a la sustracción a la protección de la ley y la desaparición forzada, en particular cuando están bajo el control de agentes no estatales.

El Estado debe, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas de la trata, redoblar los esfuerzos para prevenir la trata y la desaparición de personas. En particular, debe modificar su marco jurídico para asegurar la penalización efectiva de todas las formas de trata de personas.

Lituania.

- Acceso a la información para quienes investiguen delitos de desaparición forzada.

Preocupa al Comité el hecho de que puedan imponerse restricciones al derecho del fiscal encargado de la investigación a acceder a la información que constituya un secreto oficial o de Estado y sea pertinente para la investigación de una desaparición forzada.

El Comité recomienda al Estado parte que garantice que las autoridades encargadas de la investigación de las desapariciones forzadas tengan acceso a toda la información y documentación de interés para la instrucción.

- Investigación de detenciones en secreto.

El Comité, reiterando las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura en 2014, insta al Estado parte a que concluya en un plazo razonable la investigación sobre las alegaciones relativas a su participación en programas de entrega y detención en secreto, que haga rendir cuentas a los culpables y que adopte las medidas necesarias para que las víctimas sean debidamente reconocidas y reciban un recurso y una reparación apropiados. Asimismo, que vele porque su proceso de investigación sea transparente y que le proporcione información actualizada sobre las conclusiones de dicha investigación y, si procede, de las sanciones impuestas a los culpables.

Japón.

- Situación de las llamadas “mujeres de solaz”.

El Comité está preocupado por la falta de información estadística sobre el número de las llamadas “mujeres de solaz”¹⁷ que hayan podido ser sometidas a desapariciones forzadas, y sobre la falta de

¹⁷El término “mujeres de consuelo”, “mujeres de solaz” o “comfort women”, fue un eufemismo usado para describir a las mujeres que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres eran secuestradas y encarceladas en “estaciones de consuelo”.

investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los autores de esos actos. Además, le preocupan las denuncias sobre la apropiación indebida de niños nacidos de esas mujeres, así como la negativa del Estado parte a investigar esos casos y que las víctimas no hayan recibido reparaciones adecuadas.

El Comité recomienda al Estado que: a) confeccione estadísticas precisas sobre el número de las llamadas “mujeres de solaz” que pueden haber sido víctimas de desapariciones forzadas, realizar investigaciones y garantizar los derechos a la verdad y la reparación; b) asegure de que todos los casos, incluidas las denuncias de apropiación de niños nacidos de esas mujeres, se investiguen cuanto antes y de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar esos hechos, y aunque no se haya presentado formalmente ninguna denuncia; c) vele por que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, se les sancione en función de la gravedad de sus actos; d) garantice la divulgación de toda la información relacionada con los hechos y la documentación; e) Se asegure de que todas las víctimas reciben una reparación adecuada que tenga en cuenta las cuestiones de género, y f) Tutelle el derecho a la verdad.

Albania.

- Desapariciones forzadas cometidas durante el régimen comunista (1944-1991).

El Comité lamenta que el Estado no haya realizado todavía investigaciones con miras a identificar y enjuiciar a los responsables, y ofrecer todas las formas de reparación a las víctimas y sus familias.

Es por ello que alienta al país a que redoble sus esfuerzos para esclarecer eficazmente las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el régimen comunista, en lo que respecta, sobre todo, a la suerte y el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada y a que considere la posibilidad de investigar esos delitos, enjuiciar a los responsables y proporcionar todas las formas de reparación a las víctimas y sus familias.

- Responsabilidad de particulares.

El Comité alienta al Estado de Albania a que especifique de manera explícita en la legislación nacional las medidas establecidas en el artículo 3 de la Convención, en cuanto a la aplicación respecto de los actos cometidos por agentes no estatales, y a las consecuencias de ello para los derechos de las víctimas (art. 3). Se alienta al Estado parte a que incorpore a la legislación nacional las medidas a que se hace referencia en el artículo 3 de la Convención, relativas a los actos definidos en el artículo 2 de la Convención que sean obra de grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales.

Honduras.

- Desapariciones de migrantes y cooperación regional.

Preocupa al Comité la gran cantidad de migrantes hondureños desaparecidos en el extranjero, así como el descubrimiento de fosas clandestinas en México, donde se encontraron víctimas hondureñas, entre las cuales podría haber víctimas de desaparición forzada.

El Comité recomendó al Estado parte: a) redoblar sus esfuerzos para que se prevengan y se investiguen las desapariciones de migrantes, se persiga penalmente a los responsables y se proteja adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores; b) garantizar la búsqueda inmediata de las personas migrantes desaparecidas y en caso de hallar sus restos, su identificación y restitución en condiciones dignas; establecer una base de datos actualizada de migrantes desaparecidos; c) garantizar el relevamiento de información ante mortem y su integración en el banco de datos forenses de migrantes desaparecidos; d) garantizar que los familiares y allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar en las investigaciones y búsqueda; e) fortalecer la cooperación con las autoridades de otros Estados de la región para impulsar la búsqueda de migrantes desaparecidos y la investigación de los responsables.

Colombia.

- Falsos positivos.

Principalmente preocupa al Comité los casos denominados “falsos positivos” en Colombia, calificables como ejecuciones extrajudiciales que asimismo encuadran en la definición de desaparición forzada de la Convención, los cuales se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar. Ello no garantiza una investigación independiente e imparcial ni su adecuada calificación jurídica.¹⁸

Recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar en la práctica que todos los casos en los que se presuma que la víctima fue sometida a desaparición forzada, aun cuando se la hallare sin vida, sean conocidos desde el inicio por la jurisdicción ordinaria.

Paraguay.

¹⁸ La figura de los “falsos positivos en Colombia” es como se conoce al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco de la guerra a grupos armados irregulares que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate entre el 2006-2009 durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.

- **Investigación de las desapariciones forzadas entre 1954 y 1989.**

El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte acerca de las actividades llevadas a cabo para localizar e identificar a las personas que hubieran sido sometidas a desaparición forzada entre 1954 y 1989 y observa con preocupación el reducido número de víctimas que habrían sido localizadas y que las mismas aún no habrían sido identificadas. recomienda que se deberían intensificar esfuerzos con miras a localizar e identificar a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período. En particular, encomienda la adopción de las medidas necesarias para: a) asegurar que los órganos encargados de la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal suficientes para poder realizar sus labores de manera pronta y eficaz; b) acelerar la conformación y puesta en funcionamiento del Banco de Datos Genéticos; c) garantizar, en caso de fallecimiento de la víctima e identificación de los restos, su respeto y restitución.

Iraq.

- **Denuncias de desapariciones forzadas generalizadas.**

Preocupan al Comité las denuncias de una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, y algunas de ellas se produjeron después de la entrada en vigor de la Convención. El Comité exhorta al Estado a que aplique sus recomendaciones, que se formulan en un espíritu constructivo de cooperación, a fin de asegurar que la Convención se aplique plenamente de jure y de facto.

- **Actos cometidos por el llamado Estado Islámico de Iraq y el Levante.¹⁹**

El Comité recomienda a Iraq que procure impedir cualquier violación de la Convención, incluso en zonas controladas actualmente por el llamado Estado Islámico en el Iraq y el Levante y sus grupos afiliados. También le recomienda que intensifique su labor destinada a asegurar que se documenten e investiguen de manera rápida, exhaustiva e imparcial todas las denuncias de actos contemplados en el artículo 2 de la Convención que hayan sido cometidos por el llamado Estado Islámico en el Iraq y el Levante o por cualquier otro grupo de personas sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios del Estado; y que los responsables sean juzgados y, en caso de ser

¹⁹ El grupo ha sido designado como una organización terrorista por la O.N.U. ISIS es conocido ampliamente por sus videos de decapitaciones y otros tipos de ejecuciones tanto de soldados como de civiles y hasta periodistas y miembros de ayuda humanitaria. Participaron en la insurgencia iraquí después de que tropas de una coalición multinacional, principalmente estadounidense y británica invadieran Iraq en 2003. El grupo se autoproclamó como califato y se autodenominó como el Estado Islámico en junio de 2014.

declarados culpables, castigados de acuerdo con la gravedad de sus actos. Además, el Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que se busque y se localice a todas las personas privadas de libertad por esos grupos y cuyo paradero siga siendo desconocido.

- **Detención secreta.**

Inquietan al Comité las denuncias en el sentido de que, en algunos casos: a) no se ha respetado el derecho de las personas privadas de libertad a informar inmediatamente a su familia de su reclusión o del traslado a otro establecimiento; y b) los funcionarios no han mantenido expedientes exactos de los casos de privación de libertad (arts. 17, 18 y 22).

El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona sea detenida en secreto, entre otros medios garantizando que toda persona privada de libertad goce, en el derecho y en la práctica y desde el inicio de su reclusión, de todas las salvaguardias legales fundamentales previstas en el artículo 17 de la Convención y en los demás tratados de derechos humanos en los que el Iraq es parte. En particular, el Estado parte debe garantizar que: a) sólo puedan aplicar la privación de libertad funcionarios a los que la ley autorice a detener y recluir a personas y en estricto cumplimiento de la ley; b) las personas privadas de libertad sean mantenidas únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados; c) todas las personas privadas de libertad puedan comunicarse sin demora y de forma periódica con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y, en el caso de los extranjeros, con sus autoridades consulares; d) se proceda a la inscripción de todas las privaciones de libertad, sin excepción, en registros y/o expedientes uniformes que incluyan, como mínimo, la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención.

El Estado debe también investigar todas las denuncias de detención secreta, y velar por que: a) cualquier centro de detención secreta o lugar donde haya personas sometidas a detención secreta sea inmediatamente clausurado o convertido en un centro de detención ordinario, de conformidad con la Convención y las normas internacionales pertinentes; b) toda persona involucrada en el mantenimiento de otras personas en detención secreta comparezca ante la justicia y sea castigada de acuerdo con la gravedad de sus actos; y c) las víctimas reciban una reparación adecuada, que incluya medidas de rehabilitación.

Bosnia y Herzegovina.

- **Enjuiciamiento de crímenes de guerra (Ex- Yugoslavia).²⁰**

Al Comité le preocupa que el país retrase el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y que el número de procesos y condenas de responsables de desapariciones forzadas continúe siendo muy escaso.

El Comité recomienda al Estado acelerar sus esfuerzos por aplicar la Estrategia Nacional para el Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra, y que todos los casos de desapariciones forzadas que puedan haber sido cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaban con su autorización, apoyo o aquiescencia en el contexto de los conflictos armados en la ex-Yugoslavia se investiguen a fondo, de manera imparcial y sin demora, y que los responsables, incluidos los mandos y los superiores civiles, sean castigados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

Montenegro.

- **Enjuiciamiento de crímenes de guerra.**

El Comité observa que en Montenegro se han instruido y enjuiciado seis casos de crímenes de guerra relacionados con actos cometidos en el pasado, en el contexto de los conflictos armados en la ex Yugoslavia y expresa su preocupación por las informaciones de varias fuentes que señalan las deficiencias de procedimiento que dieron lugar a la absolución de la mayor parte de los acusados, lo que puede suscitar dudas acerca de la idoneidad de las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la impunidad. Asimismo, se advierte la falta de investigaciones acerca de la responsabilidad de los mandos, la coautoría y la complicidad, debido a lo cual pocos de los responsables de alto nivel tuvieron que rendir cuentas, y sobre la lenidad de las penas impuestas a los procesados, que en algunos casos fueron inferiores al mínimo legal porque se aplicaron circunstancias atenuantes. En este contexto, el Comité celebra la adopción por el Estado parte de la Estrategia para Investigar los Crímenes de Guerra, en mayo de 2015, y el establecimiento de órganos especializados para investigar e instruir los casos de crímenes de guerra, entre ellos una

²⁰ Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que se sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las seis ex repúblicas yugoslavas. Se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses por el otro. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unas 130 000 a 200 000 muertes. Las atrocidades de las que el mundo tomó conciencia, llevó al Consejo de Seguridad de la O.N.U., ante la ausencia de consenso para obtener un tratado que constituya un Tribunal, a actuar invocando el Cap. VII de la Carta. Así, emitió la Resolución 808 (1993) del 22 de febrero de 1993 y la Resolución 827 (1993) del 25 de mayo de 1993, estableciendo por la primera de dichas resoluciones la creación de un Tribunal Internacional para la Prosecución de Personas responsables por las serias violaciones al Derecho Internacional Humanitario y aprobando por la segunda de ellas, al Reporte que le presentó al Consejo de Seguridad el Secretario General Boutros Boutros-Ghali, incluyendo como anexo al Estatuto de dicho Tribunal.

nueva fiscalía especial y un departamento especializado en crímenes de guerra, establecidos en el marco del Tribunal Superior de Podgorica (arts. 8, 12 y 24).

- **Salvaguardias legales fundamentales.**

El Comité hace suyas las preocupaciones expresadas por el Comité contra la Tortura (véase CAT/C/MNE/CO/2, párr. 7), según el cual, en la práctica las personas privadas de libertad no cuentan sistemáticamente con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el comienzo mismo de la privación de libertad. Además, el Comité lamenta que el derecho a recurrir ante un tribunal independiente la legalidad de una detención no se mencione específicamente en la lista de derechos que no pueden limitarse en un estado de guerra o de emergencia (arts. 17 y 18). El Comité recomienda al Estado la adopción de garantías para que todas las personas privadas de libertad puedan comunicarse sin demora con sus familiares o con cualquier persona de su elección, y tengan acceso a un abogado independiente desde el comienzo de su privación de libertad, se garantice el derecho a interponer un recurso contra la legalidad de una detención.

- **Cooperación regional entre Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia**

El Comité celebra las diversas medidas adoptadas para promover la cooperación a nivel regional en la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la firma en agosto de 2014 por Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia de la Declaración sobre el papel del Estado en relación con las personas desaparecidas como resultado del conflicto armado y los abusos de los derechos humanos, y la firma en 2012 de un acuerdo de cooperación mutua entre las comisiones para las personas desaparecidas de Montenegro y Serbia, para localizar a las personas desaparecidas (arts. 12 y 24).

Burkina Faso.

- **Institución nacional de derechos humanos.**

El Comité alienta a que el país acelere el proceso de revisión de la ley por la que se instituye la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sea plenamente independiente y se le asignen recursos humanos y financieros suficientes para su funcionamiento, en plena conformidad con los Principios de París. Asimismo, lo invita a que incluya explícitamente en el mandato de esta institución la cuestión de las desapariciones forzadas.

- **Participación de las víctimas en las investigaciones.**

El Comité toma nota de que, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, la víctima participa en la investigación sobre las desapariciones forzadas, constituyéndose en parte civil o

como testigo. Sin embargo, observa que estas disposiciones no son muy claras en cuanto al alcance de la participación de la víctima en los procedimientos penales. Asimismo, observa que en el Estado no existen organismos especializados para investigar y procesar los casos de desaparición forzada. Destaca que, según la delegación del Estado parte, la competencia para investigar y procesar recae en la policía judicial, los tribunales ordinarios y, en cierta medida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Comité alienta al Estado a que, durante la reforma del Código de Procedimiento Penal, se asegure de que este permita a las víctimas de desaparición forzada participar activa y plenamente en los procedimientos judiciales relativos a dichos actos. Asimismo, lo invita a considerar la posibilidad de formar específicamente a determinados agentes dentro de la policía judicial y los tribunales que puedan investigar, llegado el caso, los presuntos casos de desaparición forzada e incoar acciones penales en esos casos.

Túnez.

- Revolución de 2011, de los jazmines o intifada de Sidi Bouzid.²¹

El Comité observa los esfuerzos y avances que ha hecho el Estado en materia de derechos humanos a partir de la revolución de 2011. El Comité considera que, al momento en que se aprobaron las presentes observaciones finales, la legislación vigente en el Estado parte y la actuación de algunas de sus autoridades competentes todavía no se ajustaba plenamente a las obligaciones que incumben a los Estados que se han adherido a la Convención.

- Justicia de transición.

El Comité acoge con beneplácito el sistema de justicia de transición establecido de conformidad con la Ley Orgánica núm. 53 con inclusión de sus referencias a las desapariciones forzadas. El Comité, al tiempo que observa con preocupación que las investigaciones de las denuncias de desaparición forzada de Kamel Matmati (desde 1991), Fathi Louhichi (desde 1996) y Walid Hosni (desde 2009) no han concluido aún a pesar del tiempo que ha pasado desde que se denunciaron esas desapariciones, observa que la Comisión para la Verdad y la Dignidad ha comenzado procedimientos de investigación en relación con esos casos. Observa también que la Comisión ha recibido varias denuncias relativas a desapariciones forzadas y que está trabajando para localizar los

²¹ La Revolución tunecina de 2011 conocida como “Revolución de los Jazmines” o la “Intifada de Sidi Bouzid”, comenzó en la ciudad de Sidi Bouzid como una serie de protestas con gran presencia de jóvenes, sentando un precedente decisivo en el mundo árabe cuando consiguieron derrocar al gobierno autocrático de Zine El Abidine Ben Ali. Los medios de comunicación tomaron como fecha de inicio el 17 de diciembre de 2010, cuando un joven universitario y vendedor ambulante se quemó a lo bonzo en esa ciudad para protestar por la acción de la policía que le confiscó su puesto callejero.

lugares en que están enterrados los cuerpos de las víctimas. Toma nota asimismo con interés de las medidas adoptadas por la Comisión en materia de reparación, incluida la reparación urgente en relación con necesidades de salud, y observa que está trabajando para establecer un completo programa de reparaciones (arts. 11, 12 y 24).

Kazajstán.

- Mecanismo nacional de prevención.

El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se haya aprobado la ley por la que se modifican algunos instrumentos legislativos en relación con la creación del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que el Comisionado de Derechos Humanos haya sido designado mecanismo nacional de prevención, puesto que considera que estas medidas podrían contribuir sustancialmente a prevenir las desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos y obligaciones que se contemplan en la Convención. Si bien toma nota de la variedad de lugares visitados por el mecanismo nacional de prevención, el Comité expresa preocupación por la información según la cual la legislación excluye de la competencia del mecanismo determinados lugares en que se puede mantener a personas privadas de libertad. A este respecto, el Comité observa con interés que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado parte, se están adoptando medidas para modificar la legislación pertinente a fin de ampliar el conjunto de lugares que pueden ser objeto de visitas del mecanismo nacional de prevención.

Argentina.

- Existencia de nuevos casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social.

Estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad (arts. 6 y 12). El Comité alienta al Estado argentino a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada. El Comité recomienda, asimismo, que el Estado promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados. El Comité toma nota con preocupación de los informes recibidos que dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido

investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito (art. 12). Al respecto, el Comité insta a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.

- **Fiscales relevados de su función.**

El Comité reconoce la labor de los fiscales en la investigación de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura; sin embargo recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada hayan sido relevados de su función (art. 12). Al respecto, el Comité recomienda que en razón de su gran complejidad, la investigación de los crímenes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacitados, y en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia en la investigación de estos delitos.

- **Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.**

El Comité celebra que existan medidas de protección a víctimas y testigos. Sin embargo, muestra su preocupación sobre los siguientes aspectos: a) que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como uno de los supuestos de intervención del programa; b) las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer y prestar testimonio, en muchos casos, traumáticas y revictimizantes; c) la insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad; d) el caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Julio López²², aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualidad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos. Por ello, el Comité insta al Estado parte a que realice todas las actuaciones necesarias para asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas a las que se

²² Luego de la última dictadura militar, el Congreso de la Nación por ley 24.952 de fecha 17/4/98 derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y posteriormente las declaró insanablemente nulas por ley 25.779 de fecha 3/9/2003. La causa por delitos de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz fue la primera en ser reabierto y Jorge Julio López fue uno de los testigos directos que declaró en el juicio sobre los crímenes que se le imputaban al represor. El día 18 de septiembre de 2006 -el día antes de la condena de Etchecolatz- López desapareció sin dejar rastros, en la ciudad de La Plata.

refiere el artículo 12, párr. 1²³, de la Convención. En particular, lo alienta a implementar las medidas necesarias para proteger a los testigos que se encuentren privados de libertad.

Conclusiones.

Luego de estudiar las 21 Observaciones Finales del Comité CED advertimos lo siguiente:

- Las mayores preocupaciones están relacionadas con cuestiones para prevenir las desapariciones forzadas, ya que en todos los informes de los Estados Partes el Comité insiste en la recomendación de adoptar medidas preventivas.
- En el 90% de los Estados Partes analizados el Comité recomienda que revean su legislación interna para adecuarse a la Convención.
- El 62% de los Estados Partes no lleva adelante las investigaciones sobre desapariciones forzadas en su territorio, por lo cual el Comité efectuó recomendaciones al respecto.
- El Comité recomendó a 57% de los Estados Partes estudiados que establezcan explícitamente y conforme a la Convención la responsabilidad de los superiores jerárquicos.
- Las recomendaciones relacionadas con la competencia del Comité se manifiestan en el 52% de los Estados Partes.
- Las preocupaciones en torno a la ausencia de registros de las personas privadas de la libertad se advierten en el 48% de los Estados.
- Las problemáticas sobre jurisdicción aplicable para entender los delitos de desapariciones forzadas se observan en el 43% de los Estados Partes en la Convención.

A su vez, consideramos importante mencionar que el Comité comenzó a emitir sus observaciones con perspectiva de género en del año 2015, en la Observación final al Estado de Iraq de fecha 3 de noviembre. A partir de dicha fecha y hasta la última observación final analizada, el Comité expresa su preocupación al respecto, sobre la base de enfatizar la singular crueldad con que las desapariciones forzadas afectan los derechos humanos de las mujeres, por ser vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género. Se destaca que las mujeres que son familiares de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias.

El delito provoca múltiples afecciones: por un lado, afecta a la víctima directa de la desaparición que en la mayoría de los casos es torturada, y por el otro, a los miembros de su familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos. Si finalmente son liberadas, las víctimas sufren

²³ El artículo hace referencia a la persona denunciante, así como a los testigos, los allegados de la persona desaparecida, sus defensores y todo aquel/aquella que participe de la investigación.

secuelas físicas y psicológicas que los acompañaran el resto de sus vidas. Es por ello, que el Comité hace suyas las preocupaciones expresadas por el Comité contra la Tortura y recomienda que las reparaciones a las víctimas sean integrales y se efectúen con una perspectiva de género, teniendo en cuenta cuestiones tales como la orientación sexual e identidad de género y prestándose especial atención a las personas especialmente vulnerables, como los niños, mujeres y las personas con discapacidad.

Lamentablemente, del estudio efectuado podemos concluir que la desaparición forzada es un flagelo mundial. Las desapariciones forzadas que históricamente fueron obra de las dictaduras militares, se perpetran hoy día en situaciones de conflicto interno en los Estados como forma de represión política de los oponentes. Se advierte la utilización por los países de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.